



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos
T: : +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org

2020 Numero 8

Edición Español

1 de julio 2020

EDITORIAL

Solidaridad con las víctimas de la represión estatal

El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de los derechos humanos en Filipinas, revela al mundo lo que ha sufrido el pueblo filipino en los últimos tres años bajo el régimen de Duterte.

Asesinatos sistemáticos y generalizados de personas pobres por sospechas completamente dudosas de consumo de drogas, tráfico de drogas y delitos menores. Intimidación, represión y asesinato sistemáticos y generalizados de filipinos que se oponen a las políticas represivas, cleptocráticas y traidoras de Duterte. De hecho, el pueblo filipino sufrió una represión intolerable y mortal por parte de un gobierno que pretende representar sus intereses e ideales.

En lugar de cumplir sus promesas, el régimen de Duterte ha llevado al país a una pobreza, desempleo, bancarrota y subdesarrollo más profundos. Y los filipinos que exigen mejores condiciones sociales están aterrorizados por los secuaces armados del régimen.

El informe de la Sra. Bachelet da un golpe a las negaciones de Duterte y sus diplomáticos. Se sientan piadosamente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y niegan rotundamente la existencia de graves violaciones de los derechos humanos bajo su gobierno. Peor aún, lanzan insultos en su contra y amenazan a los grupos de derechos humanos filipinos e internacionales que se atreven a exponer la situación real en el país.

Nos unimos al llamamiento para una mayor solidaridad internacional con el pueblo filipino contra la represión estatal en Filipinas. Entre otros, la protección para los defensores de los derechos humanos y los activistas políticos debe continuar y fortalecerse. La llamada a la liberación de todos los presos políticos, especialmente los ancianos y los enfermos, debe ampliarse. En el clima de represión y fascismo que se empeora cada vez más, también se deben tomar medidas de responsabilidad internacionales.

El pueblo filipino no será intimidado por el terrorismo del gobierno de Duterte. El apoyo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la comunidad internacional le dará a la gente mayor coraje y resolución en su lucha contra este régimen antipilipino, y en su continua lucha por la liberación nacional y social. **UP**



Michaele Bachelet. Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Foto: OHCHR

La comisaria de Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó un informe sobre las Filipinas.

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHCHR), Michaele Bachelet, emitió su informe sobre la situación de los Derechos Humanos en las Filipinas el 4 de junio de 2020. El documento, de 26 páginas, fue preparado para cumplir con la Resolución 41/2 del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en

la cual se solicitaba dicho informe y la presentación de este en la 44ª Sesión de UNHRC que empezará en junio de 2020.

El informe ofrece una visión general de la situación actual de los derechos humanos en las Filipinas. En él, se habla de estos asuntos, particularmente donde hay indicios de causas sistemáticas que sustentan dichas violaciones.

El profesor Jose Maria Sison, presidente fundador del CPP y principal asesor político de la NDFP, dijo “el informe expone claramente que las violaciones de los derechos humanos han sido cometidas en nombre de la seguridad nacional, de la guerra con las drogas ilegales y alentados por las altas autoridades... Las recomendaciones (del informe) incluyen una llamada al régimen de Duterte para que rectifique la nefasta situación de los derechos humanos y haga justicia a las víctimas”.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

“Pero conocemos los límites de dicha llamada ante un régimen empeñado en gobernar mediante el terrorismo de estado y aspirando a una dictadura fascista total”, añadió también.

La guerra de Duterte “contra las drogas”, figura exhaustivamente en el informe de Bachelet. El gobierno de Manila deniega que exista una política para matar a las personas que consumen o usan drogas. También declara que dichas muertes tuvieron lugar mediante operaciones policiales legítimas. Mientras la Policía Nacional Filipina (PNP) afirma que han muerto 5.601 personas en la “guerra anti-droga”, otras agencias gubernamentales han dado cifras que lo contradicen. El informe expone que las operaciones sobre drogas y las matanzas cometidas, por la PNP y por personas inidentificadas, causaron 20.322 muertes desde el 1 de junio del 2016 al 27 de noviembre del 2017— un promedio de casi 40 muertes por día —.

La PNP afirma que ha puesto en marcha 4.583 investigaciones por esas muertes. Sin embargo, solo en un caso, el del asesinato de Kian delos Santos, en agosto del 2017, fueron condenadas tres personas de la PNP por dicho asesinato.

El informe también expresa la preocupación en la respuesta del gobierno de Duterte al “terrorismo” y el conflicto social, el cual ha expuesto que “han sido propuestas nuevas leyes y enmiendas preocupantes con el objetivo expreso de fortalecer el orden público y combatir el terrorismo, que corren el riesgo de erosionar las protección constitucional y legal”.

El informe menciona la restauración de la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, el descenso de la edad para la responsabilidad criminal y la aprobación de la Ley Anti-Terrorismo que remplazará la problemática Ley de Seguridad Humana. Se declara en él que “(la Ley Anti-Terrorismo) diluye el resguardo de los derechos humanos, ampliando la definición de terrorismo y el período de detención sin orden judicial de tres a catorce días prorrogables otros diez días extra”.

La UNHCHR ha expresado la gran preocupación por las personas defensoras de los derechos humanos filipinos, quienes han recibido amenazas de muerte y intimidaciones mediante mensajes de texto, llamadas telefónicas y a través de las redes sociales. Citó el caso de la activista por los derechos humanos Honey Mae Suazo, quien ha estado desaparecida desde el 2 de noviembre del 2019.

En una pequeña selección, el informe cita informes del gobierno de Manila alegando abusos de los derechos humanos por parte del New People’s Army (NPA) incluyendo asesinatos, secuestros, reclutamiento de menores y extorsión. También se admiten él que, debido a que el gobierno de Duterte le ha rehusado a la ONU el acceso al país, ésta no ha podido verificar dichos informes.

Coni Ledesma, jefa de la Oficina Especial para la Protección de la Infancia, dijo que “El NPA tiene una política muy estricta contra el reclutamiento de personas menores de 18 años”.

También ha añadido que el Comité de seguimiento del NDFP tiene una oficina local en Quezon City, la cual recibe e investiga las denuncias de presuntas violaciones de los derechos humanos por parte del NPA. Ledesma invita a la UNHCHR a comunicarse con el Comité de seguimiento del NDFP para verificar dichas alegaciones. **UP**

*Las familias de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales exigen justicia.
Foto: Carlo Manalansan | bulatlat.com*





100% INSEGURO. Detenidos abarrotados en una celda típica en las Filipinas.
Foto: asianews.it

El gobierno de Duterte rechaza la liberación de los prisioneros políticos, enfermos y ancianos

El General Eduardo Año, Secretario del Interior del gobierno de Duterte, declaró en marzo, “¡Las cárceles bajo nuestra jurisdicción son 100% seguras!”

Su absurda declaración va en contra de la realidad que enfrentan los prisioneros filipinos. Al menos 387 de las 467 cárceles tienen una tasa de congestión del 450%. Esto se traduce en que seis detenidos ocupan un espacio destinado sólo a uno.

Sólo 13 médicos atienden a 47.326 prisioneros en todo el país en las siete colonias penales del país.

La presión para la liberación de los prisioneros está aumentando, ya que la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, hizo un poderoso llamado el 25 de marzo de 2020: “Los gobiernos no deben olvidar a los que están tras las rejas... las consecuencias de descuidarlos son potencialmente catastróficas”.

En Filipinas, 22 presos políticos, en nombre de 609 presos políticos, presentaron el 8 de abril una petición ante el Tribunal Supremo para su liberación temporal y la de los enfermos y ancianos, así como la de los presos de bajo riesgo. En la petición de los 22 presos políticos se pide la libertad bajo fianza.

La Oficina del Procurador General (OSG), a través de su jefe José Calida, dijo al Tribunal Supremo que “la cuestión de la inadecuación del sistema penitenciario filipino para cumplir el altísimo nivel de las normas internacionales no justifica la puesta en libertad de los presos. Los peticionarios no han mostrado ninguna complacencia por parte del Estado”. El jefe de la OSG está bajo presión, porque el Comité de Justicia de la Cámara de Representantes y la Oficina de Penitología Carcelaria y Administrativa (BJMP) han expresado su apoyo a la concesión de liberaciones temporales a los prisioneros elegibles como medio para descongestionar las cárceles.

A medida que se expone la insuficiencia del sistema penitenciario filipino, que se extiende el COVID-19 y se exponen las ridículas posiciones del ex general Eduardo Año y las débiles objeciones de José Calida de la OSG, el apoyo generalizado a la petición de los presos políticos gana cada vez más apoyo. Como reacción, el gobierno de Duterte ha lanzado una masiva y viciosa campaña de pintadas en rojo contra los miembros de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL) que representan a los presos políticos. El régimen amenaza con inhabilitarlos.

Tras el llamamiento de la Presidenta Bachelet de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos para que se libere a los presos, algunos gobiernos iniciaron importantes medidas para liberar a los presos. En Irán, donde hay 190.000 presos, de los cuales 25.000 están infectados con el coronavirus, el gobierno anunció que liberará temporalmente a 85.000, de los cuales 10.000 han sido perdonados. El estado alemán de Westfalia del Norte anunció el 25 de marzo la liberación de 1.000 prisioneros cerca del final de sus sentencias. Anteriormente en Canadá, en el estado de Ontario, 1.000 fueron liberados el 17 de marzo. Se están haciendo gestiones similares en el estado estadounidense de Nueva Jersey, así como en el Reino Unido, Irlanda, Polonia e Italia, entre otros. **UP**



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: : +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org